



VERACIDAD Y DERECHO A LA INFORMACIÓN

Juan Ramón de Páramo

Resumen: El artículo gira en torno a la sentencia del TC español 240/1992, de 21 de diciembre, en la que se resolvió un recurso de amparo en el cual el cura de Hío demandaba al diario *El País*, que en 1984 había publicado una noticia en la que se le atribuía una falsa conducta que comprometía su honor. ¿Cómo resolver el conflicto entre las razones constitucionales que favorecen y priman la libertad de información y aquellas que favorecen el derecho al honor? La libertad de información no es sólo un derecho fundamental, sino una institución básica de las democracias. ¿Debe la víctima soportar exclusivamente y de manera individual el coste de la primacía de la libertad de información, que es un bien colectivo? ¿Es suficiente la garantía del derecho de rectificación? En el artículo se pone de manifiesto que tales conflictos constitucionales todavía no han sido resueltos de manera satisfactoria.

La sentencia resolvió un recurso de amparo que traía causa de una noticia del diario *El País* (17.8.1984) en la que se decía que el cura de Hío —confundido por el periodista con el de Viñó, localidad cercana—, D. Andrés Carril Pardo, había encabezado, garrote en mano, una cruzada vecinal contra un campamento de nudistas para desalojar la playa de Barra (Galicia). Unos días después, el 26 de agosto, el diario rectificó a medias, pues lo que hizo fue publicar las declaraciones del sacerdote aludido, que negaba su participación en los hechos; después daba cuenta de que los vecinos confirmaban el mentís. Dos años después, el sr. Carril interpuso una demanda civil contra la empresa editora del diario, y la

STS de 11.12.1989 declaró no haber lugar al recurso de casación de los demandados condenados por la resolución de instancia a pagar dos millones de pesetas de indemnización.

Los demandados recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional, que se lo concedió, y entre sus fundamentos sostenía: el error no puede considerarse... esencial... ya que era... la condición de sacerdote de la persona que se había visto involucrada en los hechos” y su “destacada participación” en ellos, “dada la posición que asume en la comunidad, lo que constituía extremo relevante de la información” y ésta “se enmarca... en un artículo de unas mayores pretensiones comunicativas” (FJ 7). ¡Parece que el acierto en la profesión difamada era lo realmente importante, lo relevante de la información, con independencia de quien fuera esa persona!

El Tribunal sostuvo además que hubo diligencia suficiente por parte del medio de información pues “consta que el periodista que obtuvo la información... la contrastó” con una fuente profesional que había sido testigo de los hechos que luego narró objetivamente (FJ 7). Además, los hechos tenían indudable “relevancia pública” y el “carácter molesto e hiriente de una información no constituye por sí solo un límite al derecho” a difundirla libremente. El mismo fundamento alude a dos cuestiones: en primer lugar, dice que “aunque el artículo... no responde estrictamente a la modalidad informativa del denominado reportaje neutral (la información neutral se limita a dar cuenta de hechos sin comentarios ni apostillas, sin valoraciones ni opiniones), en él se narra o desarrolla una información ajena que ya había sido dada a conocer a la opinión pública, sin añadir... enunciados y consideraciones que alterasen el contenido esencial de la comunicación informativa”; en segundo lugar dice que la “incorporación de una rectificación cuando se produce de modo espontáneo... es sin duda reveladora de la actitud del medio de información o del periodista en la búsqueda de la veracidad de lo informado”. De manera que la técnica del reportaje neutral, esto es, la de dar cuenta

de lo que otros han dicho, citándolos o reproduciendo sus manifestaciones, aunque tengan contenido difamatorio, exonera de responsabilidad al periodista o al medio de comunicación y la traslada, en su caso, al autor de las manifestaciones. Cuando un reportaje o información son neutrales porque se limitan a reproducir lealmente lo que otros han dicho (sin enunciados ni apostillas, y mediando una indagación mínima sobre su veracidad), el informador está exento de responsabilidad.

Somos deudores de la cultura norteamericana sobre libertad de expresión. Esta doctrina exportó a Europa una tesis peculiar sobre este asunto (*New York Times v. Sullivan* –376 U.S.254 (1964): hay que permitir la publicación impune de noticias equivocadas sobre personajes públicos –y, por extensión, sobre asuntos de interés público– puesto que hay que privilegiar la libertad de expresión aunque sea en detrimento de la tutela de la reputación de la persona o personas involucradas. O de un modo más directo: en detrimento de la tutela de la verdad. Se trata de evitar la autocensura que provocaría hacer cargar al informador con los costes de su error. Parece que los beneficios sociales resultantes de la sobreprotección a la información en general compensan sobradamente los costes individuales que se hacen recaer sobre las personas difamadas. El interés general predomina sobre el interés particular del personaje público salvo que hubiere dolo o culpa grave, esto es, mala fe. O sea, que las personas difamadas deben pagar individualmente por unos beneficios que teóricamente obtiene toda la sociedad. Todos se benefician del disfrute de unos derechos constitucionales que unos pocos costean en contra de su voluntad. El supuesto de hecho fue el siguiente: en medio de un clima encrespado por conflictos derivados de la segregación racial y la lucha por los derechos civiles, se detuvo a Martin Luther King por irregularidades en su declaración de impuestos. *The New York Times* publicó un anuncio del comité de apoyo a M.L. King en el que se criticaba los sucesos y a algunos personajes del Estado de Alabama que participaron en la detención, entre ellos

L.B. Sullivan, jefe del departamento de policía. La descripción de los hechos que contenía el anuncio era real pero incluía algunos errores de poca trascendencia como que M.L. King había sido detenido siete veces y no cuatro, o el título equivocado de la canción que coreaban los manifestantes. Sullivan demandó al periódico y, tras ganar en las primeras instancias, el caso llegó al Tribunal Supremo. El Tribunal, además de declarar la inconstitucionalidad de la legislación sobre libelo en Alabama, mantuvo la tesis de que la formulación de enunciados erróneos es algo inevitable en un debate libre, “algún grado de abuso es inseparable del propio uso de cada cosa; y en ninguna instancia es más verdad que en la prensa”. También establecía la sentencia que debía ser el servidor público Sullivan, el demandante –no el periódico demandado– quien probase de forma suficientemente clara que la publicación se hizo con malicia real o efectiva (dolo o negligencia), pues lo contrario (obligar al medio a probar la veracidad) supondría cercenar la actividad de la prensa, ya que no publicaría cosas ciertas que conoce pero que no serían fáciles de demostrar en juicio.

Otro ejemplo. En *Ocala Star-Banner Co. v. Damron* (108), Leonard Damron, alcalde de Cristal River (Florida), se había presentado a las elecciones para un cargo en el condado. El 17 de abril de 1966, un periodista llamó por teléfono al diario *Star-Banner* y dijo que James Damron –hermano del alcalde– había sido arrestado y acusado de cometer falso testimonio. El redactor encargado de la sección correspondiente escribió la noticia, pero confundió a James con Leonard. La publicación de la noticia al día siguiente arruinó las posibilidades de Leonard Damron de ganar las elecciones, aunque el diario había publicado dos rectificaciones poco antes de que éstas tuvieran lugar. El frustrado y difamado político demandó a la empresa editora del *Star* y obtuvo una sentencia favorable de 22.000 dólares de indemnización. El Tribunal Supremo Federal anuló la sentencia por unanimidad. Como en el caso del cura de Hío, Damron era una figura pública y no

había asomo de malicia alguna en la publicación de la noticia. Sólo hubo un error, la identidad de la persona a la que se le imputaba la comisión de un delito. Pero, ¿por qué alcaldes y sacerdotes deben cargar con los costes del beneficio social? La idea de que hay que primar la generación y difusión de información política porque se trata de una especie de bien público —la libertad de expresión no es sólo un ejercicio de la autonomía personal sino un bien institucional que legitima el pluralismo político de las democracias (como dice la STC 40/1992 acerca de la posición prevalente del derecho a la libertad de información)— no justifica que ello deba hacerse precisamente a costa del sujeto pasivo de la información en cuestión cuando resulta falsa y perjudicial para él: si toda la colectividad se beneficia de los mayores flujos de información que permite la responsabilidad por culpa en comparación con los que permitiría la responsabilidad objetiva —como sostiene Coderch (1992, p.73)— es razonable pensar que también ha de corresponder a la colectividad cargar con las consecuencias de ese error pero no a las víctimas de la información equivocada por error excusable.

Schauer ha tratado de compatibilizar los dos principios que están en juego: por una lado, la protección de la libertad de expresión con el fin de evitar la autocensura; por otro, tratar de conseguir que las personas públicas difamadas cobren una indemnización en todos los casos de negligencia por parte del informador y no sólo en los de negligencia grave y mala fe (Schauer, 1992). Para ello se proponen tres argumentos: el primero defiende disociar la responsabilidad de las empresas de medios de comunicación de la que corresponda a sus redactores. El autor propone distanciar los comités de redacción de la amenaza de un pleito por difamación mediante el procedimiento de impedir que los periodistas puedan ser demandados si no han actuado con dolo o de manera muy desconsiderada. Por el contrario, la persona difamada podría presentar una reclamación por difamación por negligencia ordinaria contra la empresa editora:

los periodistas se pueden seguir equivocando impunemente y sus errores los pagan las empresas editoras. No habría autocensura y las personas difamadas serían siempre resarcidas de los perjuicios sufridos.

Coderch ve difícilmente viable esta propuesta: ni los periodistas pueden disociarse de las empresas editoras ni éstas pueden dividirse en dos. Además, la información publicada se encarece para la empresa que paga en lugar de la persona difamada, es probable que sus precios suban y la empresa, en consecuencia, venderá menos. La autocensura puede existir como presión al periodista al pensar éste que puede perder su puesto de trabajo por reestructuración de la empresa debido a los descensos de las ventas. Asumir las consecuencias que se derivan de los actos parece que es consustancial con el concepto de responsabilidad. La disociación es antinatural.

En segundo lugar, se podría contratar un seguro de responsabilidad civil por difamación, aunque en este caso las empresas pequeñas y medianas de comunicación podrían verse perjudicadas por esta posibilidad dado lo elevado de las franquicias. Cabe una tercera posibilidad, un seguro subvencionado por el gobierno, como los seguros contra las inundaciones. Pero, de la misma manera que los gobiernos están interesados en encauzar los ríos, también lo estarían en domeñar los discursos... ¿Por qué no un fondo estatal de compensación a las víctimas? Parece que hay otros comportamientos socialmente más perjudiciales que la difamación cuyas víctimas también reclamarían esta atención, además del incremento de los pleitos al vislumbrar la certeza de poder cobrar una indemnización a cargo de los contribuyentes. El Estado, aunque tarde, siempre acaba pagando...

Una solución podría venir de la diferencia entre acción declarativa (de la falsedad de la información) y acción indemnizatoria (por los daños producidos por la información falsa), permitiendo la primera en todos los casos pero reservando la segunda para los casos dolosos. El sistema español no permite esta distinción, sólo

habla de información veraz y deber de diligencia: de este modo el demandante puede perder dos veces, cuando se publica la información falsa y cuando se divulga la noticia de la sentencia que le niega la razón porque el medio de información no había sido negligente, a pesar de la falsedad, en su comprobación. Es obvio que la persona afectada puede instar y conseguir la rectificación de la noticia que considera falsa al amparo de la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, aunque debe ejercitarse inmediatamente después de publicada la información que el afectado considera inexacta, y además no se concibe como una acción declarativa del derecho al honor de quien la interpone. Creo, además, que el derecho de rectificación, para ser realmente efectivo, debería restablecer la asimetría producida —entre la falsa información y el honor perjudicado— no mediante una simple restauración simétrica del desequilibrio —por medio de una publicación en el mismo formato que la original— sino mediante una rectificación de mayores proporciones e importancia, una especie de acción afirmativa que restaurase eficazmente el primer desequilibrio.

Como ha sostenido Coderch (1992), es obvio que la doctrina constitucional que establece la prevalencia del derecho a la libertad de expresión sobre el derecho al honor ha sido elaborada para proteger a los demandados —periodistas, gestores y sus empresas— de las consecuencias de acciones penales (injurias, calumnias o desacato) o de acciones civiles por las que se reclama una indemnización de daños y perjuicios a veces muy elevada, pero no está claro que valga también para el caso en el cual lo único que pretenda el actor sea la declaración de la falsedad de la noticia, la publicación de la resolución correspondiente y la prohibición de llevar a cabo intromisiones ulteriores.

En la vida real, la oposición entre verdad y falsedad, entre acertar y equivocarse, admite muchos matices. Pretender no sólo la imposición de una sanción penal o administrativa o la condena a pagar una indemnización, sino el ejercicio de la acción declara-

tiva del derecho del actor, debería de dejar muy claro que la carga de la prueba de la falsedad de la noticia corresponde al actor y no al demandado: de este modo se facilitaría la vindicación, pero al mismo tiempo se dificulta la indemnización de las personas a las que se refieren noticias falsas de interés general y obtenidas sin negligencia.

No debemos olvidar que la investigación judicial, en lugar de la búsqueda de la verdad de la noticia, investiga la génesis de la percepción del demandado: pero la Constitución habla de “información veraz” y no de “información falsa pero diligentemente contrastada”, información equivocada pero obtenida por error excusable. Un pleito cuyo objeto no es la averiguación de la verdad sino la investigación subjetiva de la posible malicie del informador deforma la perspectiva de la realidad al promover una visión conspiratoria y personalista de la historia narrada en la noticia. En consecuencia, no sólo estoy argumentando a favor del derecho al honor de la víctima, sino ante todo, a favor de la defensa de la verdad, de la ilustración de la opinión pública, de la protección de la información frente a la manipulación interesada. Todos los ciudadanos tienen el derecho a informar y a ser informados, pero son sin duda los profesionales de los medios de comunicación quienes ocupan una posición estratégica fundamental en la articulación de la complejidad inmensa de la información, en reflejar selectivamente la realidad social. Los medios construyen la realidad social: deciden cómo se percibe la sociedad a sí misma. La exigencia constitucional de que la información sea veraz es la contrapartida de este inmenso poder de la información.

La jurisprudencia constitucional sostiene el deber de diligencia en la comprobación razonable de la verdad: la cuestión del difícil equilibrio entre la carga de la prueba de la contrastación de la información y secreto profesional parece resolverse a favor de este último; no hay que desvelar las fuentes de la información sino acreditar que se ha hecho “algo más” que propalar rumores deshonorables sin comprobación de clase alguna. ¿Qué es ese “algo más”?

Mientras que la libertad de expresión consiste en la formulación de opiniones y creencias personales, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, la libertad de información implica suministrar información sobre hechos que pretenden ser ciertos y noticiables. En consecuencia, ambas libertades tienen diferentes contenidos y límites. La primera está delimitada por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas que no tengan relación con las ideas u opiniones que se expongan e innecesarias para la expresión de las mismas, ya que la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto (STC 105/1990). La libertad de expresión —con un campo de acción todavía más amplio cuando afecta al ámbito de la libertad ideológica— carece del límite intrínseco que constitucionalmente se marca al derecho de información consistente en la *veracidad* (STC 76/1995: “...la libertad de expresión comprende la de errar... la afirmación de la verdad absoluta, conceptualmente distinta de la veracidad como exigencia de la información, es la tentación permanente de quienes ansían la censura previa”).

¿Qué límites tiene el derecho a la libertad de información? La libertad de información protege la transmisión de información veraz relativa a asuntos de interés general o relevancia pública. Se requiere:

a) El *interés general y la relevancia pública* de la información divulgada como presupuesto de la misma idea de noticia y como indicio de la correspondencia de la información con un interés general en el conocimiento de los hechos sobre los que versa (STC 107/88, 171/1990, 20/1992, 41/1994, 138/1996, y 3/1997).

b) La libertad de información se ve reducida si no se refiere a personalidades públicas que, al haber optado libremente por tal condición, deben soportar una cierta *afectación* de sus derechos de la personalidad, como acontece en los supuestos de información de opinión sobre conductas privadas carentes de interés público (STC 138/1936).

c) La protección constitucional se ciñe a la información que sea veraz, condición contemplada por el propio artículo 20.1 de la

Constitución y concretada por el Tribunal Constitucional: ésta no se identifica con la verdad material ni con una realidad incontrovertible (STC/1997), sino sólo implica que el informador tiene un especial deber de comprobar la realidad de los hechos que expone mediante las oportunas averiguaciones y empleando la *diligencia* exigible de un profesional. Se pueden producir informaciones erróneas, ya que la única garantía total sería el silencio —no exactamente, a veces el silencio otorga—. Información veraz es, pues, información comprobada o contrastada según las reglas y principios de la profesionalidad informativa, con menor intensidad del deber de diligencia que frente a dichos cánones es exigible al ciudadano (STC/1996). La doctrina del TC repite continuamente la idea de que el requisito constitucional de veracidad va dirigido contra las formas negligentes e irresponsables de la actividad informativa, no a favor de la verdad material de los hechos probados.

d) Si la *fuentes* de información reviste las características que la hacen fidedigna, seria o fiable puede no ser necesaria mayor comprobación que la exactitud o identidad de la fuente, como sucede en los casos del denominado *reportaje neutral*, que difunde las afirmaciones o declaraciones que otro medio o persona realiza. (STC 240/1992, 178/1993, 4/1996, 52/1996 y 190/1996).

e) La preponderancia entre los elementos valorativos y meramente informativos de una noticia debe evaluarse por el Tribunal Constitucional atendiendo al elemento que aparece como preponderante (STC 105/1990 y 78/1995). La veracidad tiene diferente función en la libertad de información y en la libertad de expresión. Las opiniones pueden ser justas o injustas, inteligentes o torpes, pero difícilmente son evaluables tomando la verdad como punto de referencia. A las opiniones se les exige que no sean injuriosas, nada más (a veces la distinción no es tan nítida; imaginen que yo digo: el decano de la facultad llegó sobrio ayer a su despacho). La libertad de expresión y de información no son intercambiables.

f) Si bien los titulares de la libertad de información son todos los miembros de una colectividad, la protección constitucional alcanza un máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través de los medios de comunicación institucionalizados (STC 105/1990 y 176/1995).

De manera que la veracidad de la noticia, la relevancia pública de la misma o el carácter público del sujeto pasivo objeto de la información son los criterios con los que el Tribunal Constitucional opera para la resolución de los conflictos que se derivan al tratar de delimitar el honor de la libertad de información. El Tribunal Supremo ha dicho (20-01-83): “Es incuestionable que no es misión de los periodistas realizar investigaciones parapoliciales para investigar la realidad de los hechos delictivos o de otra naturaleza, ni se puede exigir a los profesionales de la información un absoluto contraste de la veracidad de toda la que reciban y transmitan, lo que implicaría no ya una ilegal limitación a la libertad de expresión, sino la muerte de la información; sí les es exigible, con mayor rigor que a cualquier otro ciudadano, dada la distinta proyección social que la de uno y otro puede tener, la observancia de aquellos deberes objetivos de cuidado imprescindibles para evitar que se puedan poner en peligro bienes jurídicos protegidos por otros derechos tan fundamentales como el de la libertad de expresión”. También hay que tener presente que una rigidez excesiva de los tribunales a la hora de evaluar la diligencia de los periodistas choca con la necesidad intrínseca de inmediatez y rapidez en que se mueve el mundo de la prensa.

Pues bien, la sentencia que nos ocupa hace un juicio de ponderación entre la libertad de información y el derecho al honor. La libertad prevalece sobre el derecho al honor en este caso, puesto que el art. 20.1.d) de la Constitución establece tal prevalencia si se dan una serie de requisitos: veracidad (no verdad material sino diligencia en su obtención), referido a personajes públicos, sobre materias de interés público y efectuado en un medio de comunicación de masas. El tribunal entiende que el requisito de veraci-

dad se ha cumplido porque no ha habido dolo ni negligencia, porque el informador ha actuado de manera recta en la averiguación de la realidad de los hechos y su leal transmisión.

¿Se resuelve de esta manera el conflicto entre las razones constitucionales que favorecen la libertad de información y aquellas que favorecen el derecho al honor? ¿Se trata de una incompatibilidad irresoluble? En el caso de nuestro ejemplo, ¿cómo proteger el honor del cura de Hío y el principio de veracidad como límite interno de la información y la especial protección que la libertad de información –aun cuando la total exactitud de la información sea controvertible– debe tener como soporte de un sistema democrático? ¿Cómo hacer compatible la protección de la actividad de la prensa –si no se protegiera de manera especial los periodistas estarían tan temerosos de cometer algún error que tomarían tan extraordinarias precauciones que no habría una circulación rápida y fluida de las informaciones– y el honor de una persona que, debido a la contingencia de pertenecer a una profesión o gremio de relevancia pública en las circunstancias que se relatan, tiene la desgracia de asumir el coste del disfrute de ese bien colectivo? ¿Quién debe asumir el coste de la preponderancia de la libertad de información sobre el derecho al honor? ¿Basta simplemente el ejercicio del derecho de rectificación para compensar los daños producidos?

Imaginemos que quien esto escribe, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, es acusado en un medio de comunicación local, y al día siguiente en uno nacional, de cometer un delito de acoso sexual a una alumna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, sede donde imparto clases. Resulta que el delito se ha cometido, pero su autor, en lugar de ser un profesor de Filosofía del Derecho es de Derecho procesal, que en lugar de Juan Ramón se llama Juan Antonio, y que su apellido en lugar de Páramo es, por ejemplo, Paramecio. Pasan algunos días hasta que se publica la oportuna rectificación, y mi casa y mi correo electrónico se convierten en un infierno de llamadas, amenazas y mensajes. Ade-

más, resulta que una comisión de profesores brasileños pasaba unos días en Ciudad Real, y vuelven a su país el día antes de la noticia rectificada. Pertenecen a una Universidad de la que depende un convenio importante que estoy negociando con Universia/Banco de Santander. ¿Quién carga con el coste de la impunidad de ese medio de comunicación? ¿La colectividad, la empresa o el desgraciado Páramo que no va a poder entrar en Brasil en muchos años y que puede guardar el convenio en ese cajón de la casa que nunca se abre?

Las normas jurídicas no ofrecen siempre razones concluyentes para decidir los casos, ya que pueden entrar en conflicto con otras normas jurídicas. Las Constituciones contienen amplias declaraciones de derechos cuyos principios pueden entrar en conflicto entre sí. ¿Cómo podemos resolver estos conflictos? El enfoque subjuntivo del derecho —determinar la norma individual que establece una cierta consecuencia normativa para un caso individual determinado— representa todavía la concepción standard de la aplicación del derecho: los casos individuales —el caso del cura de Hío— es una instancia de un caso genérico al que una norma jurídica aplicable correlaciona con esa consecuencia normativa. Pero, ¿cómo podemos hacer compatible el enfoque subjuntivo de la aplicación del derecho con la convicción de que las razones jurídicas ofrecidas por determinadas normas jurídicas no son siempre concluyentes? Una vez más: ¿cómo resolver el conflicto entre las razones constitucionales que favorecen la libertad de información y aquellas que favorecen el derecho al honor? ¿Creemos, con sinceridad, que las actuaciones del Tribunal Constitucional ya han resuelto este difícil equilibrio?

BIBLIOGRAFÍA

CARRILLO, M. (1998): "Derecho a la información y veracidad informativa", REDC, núm. 23.

- (1987): *Los límites a la libertad de prensa en la Constitución española de 1978*, PPU.
- LAPORTA, F. (1997): “El derecho a informar y sus enemigos”, *Claves*, núm. 72.
- MUÑOZ MACHADO, S. (1988): *Libertad de prensa y procesos por difamación*, Ariel.
- RODRÍGUEZ BEREJO, A. (1997): “La libertad de información en la jurisprudencia constitucional”, *Claves*, núm. 72.
- SALVADOR CODERCH, P. (1990): *El mercado de las ideas*, CEC.
- (1993): *El derecho de la libertad*, CEC.
- SCHAUER, F. (1992): “Uncoupling Free Speech 92”, *Columbia Law Review*, 1321.

SENTENCIA 240/1992, DE 21 DE DICIEMBRE

Sala Segunda: López Guerra, Díaz Eimil, *Rodríguez Bereijo* (ponente), Galdón López, González Campos y Viver Pi-Sunyer.

Fundamentos:

1. “(...) los demandantes de amparo.

Aducen (...) que las (...) resoluciones judiciales han vulnerado su derecho a comunicar libremente información veraz [art. 20.1 d) CE] (...) por haber estimado los órganos jurisdiccionales que con la noticia publicada en el diario ‘El País’ el 17 de agosto de 1984, los ahora solicitantes de amparo han incurrido en una intromisión ilegítima en el derecho al honor (...)”.

2. “(...) cuestión ya decidida por este Tribunal, el segundo de los motivos de la pretensión de amparo. Se funda éste en la aplicación por los órganos jurisdiccionales de lo dispuesto en el art. 65.2 de la Ley de Prensa e Imprenta, alegándose frente a ello que este precepto, que establece una responsabilidad solidaria de ‘los autores, directores, editores, impresores e importadores o distribuidores’, es incompatible con el derecho fundamental reconocido en el art. 20.1 d) CE, razón por la cual debe considerarse derogado por la Disposición derogatoria tercera de la Constitución.

(...) exigirle responsabilidad civil por las lesiones que pueden derivarse de las informaciones publicadas en el periódico en nada vulnera el derecho a la libertad de información, puesto que este derecho también se ejerce desde la dirección del medio periodístico y, por tanto, puede imponérsele la reparación de los daños que su ejercicio incorrecto o abusivo ocasione a terceros y lo mismo cabe afirmar de la empresa editora, ya que a ella corresponde la designación del director’ (art. 40.1 de la citada Ley).

Se concluía, en la STC 172/1990, afirmando que ‘la aplicación del art. 65.2 de esta Ley no es incompatible con el derecho de libre información, puesto que este precepto es pieza legal destinada a garantizar la efectiva restitución del honor e intimidad de las personas, bienes jurídicos también amparados por la Constitución, que resulten ilícitamente vulnerados por informaciones periodísticas vejatorias, difundidas fuera del ámbito protector del derecho de información”’.

3.

“Conviene recordar, ante todo, que la función de este Tribunal en los recursos de amparo interpuestos a consecuencia de un conflicto entre el derecho a

la información y el derecho al honor consiste en dilucidar si la ponderación judicial de los derechos en presencia ha sido realizada de modo que se respete su correcta valoración y definición constitucional, para, de llegar a una conclusión afirmativa, confirmar la decisión judicial, o, en caso contrario, reputarla lesiva de uno u otro derecho fundamental. (...) ha de adentrarse, pues, este Tribunal, en la tarea de ponderar los derechos fundamentales en conflicto, función en la que no se encuentra vinculado a las valoraciones efectuadas por los órganos jurisdiccionales cuya decisión ha sido sometida a nuestro control, a fin de determinar si la restricción que se impone a un derecho, en este caso, el derecho a comunicar libremente la información de los demandantes de amparo, está o no constitucionalmente justificada por la limitación que, en caso contrario, sufriría el derecho de la otra parte, en concreto, el derecho al honor de la persona afectada por la información (...).

Según los criterios que se han ido perfilando en la jurisprudencia constitucional, esa confrontación de derechos ha de llevarse a cabo teniendo en cuenta la posición prevalente, que no jerárquica, que sobre los derechos denominados de la personalidad del art. 18 CE ostenta el derecho a la libertad de información del art. 20.1 d) CE, en razón de su doble carácter de libertad individual y garantía institucional de una opinión pública indisolublemente unida al pluralismo político dentro de un Estado democrático, siempre que la información transmitida sea veraz y esté referida a asuntos de relevancia pública que son de interés general por las materias a que se refiere y por las personas que en ellos intervienen; contribuyendo, en consecuencia, a la formación de la opinión pública (...).

Por consiguiente, con base en las premisas expuestas, hemos de verificar si en el supuesto ahora considerado los órganos jurisdiccionales han ponderado adecuadamente en el proceso civil de protección al honor los derechos constitucionales en presencia".

4.

"Los extremos de la información habían sido obtenidos por el corresponsal del periódico de un programa informativo del Centro Regional de Televisión Española en Galicia, si bien, como quedó probado en autos, en la noticia emitida por este medio de comunicación se mencionaba, sin identificarle por su nombre, al párroco de Viñó y no al de la cercana parroquia de Hío. (...) en el diario 'El País' (...) se publicó, rectificando la información anterior, otro artículo sobre el tema, con el antetítulo 'No tengo arte ni parte en el conflicto de los bañistas, afirma el párroco de Hío' (...).

(...) estimaron los órganos jurisdiccionales que había existido una extralimitación del derecho a comunicar información, ya que, pese al interés del hecho noticiable, 'no se observó —se dice en la Sentencia del Tribunal Supremo—

por el profesional de la información así como por el Director del medio el específico deber de diligencia, pues se alteró, negligentemente y sin justificación alguna, la identificación de la persona a la que se refería el hecho noticiable y hubiera bastado un mínimo de cuidado para evitar la alteración y el error' (...)".

6.

"No habiendo sido negada ni cuestionada la veracidad de la noticia emitida en el programa informativo de Televisión Española en Galicia, el error en la identificación de la persona a la que se refería el hecho noticioso, con independencia de la importancia que sin duda tiene para quien aparece erróneamente implicado en la noticia, no puede considerarse, sin embargo, que afecte de modo determinante al contenido esencial de la información ni altere la relevancia pública y social de los hechos comunicados, ya que era, sin duda alguna, la condición de sacerdote de la persona que se había visto involucrada en los referidos acontecimientos y su destacada participación en los mismos, dada la posición que asume en la comunidad, lo que constituía extremo relevante de la información, como por lo demás ponen de manifiesto los titulares del artículo en cuestión. No debe dejarse de subrayar, en este sentido, que dicha información se enmarca en el contexto de un artículo periodístico de unas mayores pretensiones comunicativas, como revela su lectura, cuya esencia era destacar el contraste de ciertos hábitos con la moralidad y costumbres tradicionales. Debe concluirse, pues, que la inveracidad o inexactitud parcial de la información, como consecuencia del error de identificación en que se incurrió, no alcanza, en el presente supuesto, trascendencia suficiente como para entender quebrantado su carácter de información veraz y, en consecuencia, privarla de protección constitucional, por no afectar el mencionado error al contenido esencial del mensaje que se transmite".

7.

"(...) consta que el periodista que obtuvo la información y la comunicó a su diario la contrastó, antes de su publicación, con un profesional de Televisión Española en Galicia, presente durante los acontecimientos relatados, quien se la confirmó. Pese ello, fuere, como se alega en la demanda, por la similitud fonética de la denominación de una y otra localidad, fuere, como también se alegó en el proceso judicial, por la proximidad a ambas localidades del lugar en el que acontecieron los hechos, lo cierto es que en el texto del artículo se identificó erróneamente la localidad a la que pertenecía el párroco y a la persona de éste.

Pero del carácter involuntario de dicho error es prueba el hecho de que el mencionado periodista también se preocupó de contrastar la información con la persona aludida en la misma, si bien este intento de ponerse en contacto con

la persona afectada fue infructuoso al haberse ausentado ésta del municipio en dichas fechas, como posteriormente quedó acreditado en autos (...).

(...) no cabe desconocer el hecho de la pronta corrección posterior de la información publicada, que resultó parcialmente errónea. En efecto, la incorporación de una rectificación cuando se produce de modo espontáneo por el propio autor de la información o el medio que la divulgó, por su propia iniciativa o a indicación del interesado —como aquí ha ocurrido— es sin duda reveladora de la actitud del medio de información o del periodista en la búsqueda de la veracidad de lo informado. Y aunque la rectificación de las informaciones no suplanta ni, por tanto, inhabilita ya, por innecesaria, la debida protección del derecho al honor, sí la matiza o modula en supuestos como el presente (STC 40/1992, fundamento jurídico 2.), pues constituye un mecanismo idóneo para corregir y aclarar los errores que involuntariamente, y a veces de manera inevitable, se deslizan en una información rectamente obtenida y difundida, y que no afecten a la esencia de lo informado”.

“Atendidas las circunstancias expuestas, que se refieren tanto al alcance del error cometido, como al comportamiento del autor de la noticia y del medio informativo en la contrastación o verificación de lo comunicado y a la posterior corrección del error en que inicialmente incurrieron, no cabe estimar inobservada en este caso, como, en cambio, se hace en las resoluciones judiciales impugnadas, la regla general de la necesaria veracidad en el contenido de la información, que, por lo mismo, no lesiona el honor de la persona por aquélla afectada (STC 40/1992, fundamento jurídico 2.).

8. “(...) conviene verificar, por último, si concurre el requisito de la relevancia pública de la información”.

“En el presente caso es de observar que en las resoluciones judiciales impugnadas, no sólo no se cuestionó la relevancia pública de la información, sino que en ellas, expresamente, se aludió al interés noticioso del hecho comunicado en el contexto de un artículo informativo sobre el enfrentamiento y conflicto entre un grupo de vecinos de la localidad y los nudistas acampados en la playa contra el sentir y el parecer de aquéllos; por lo que, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y el contenido mismo de la información, la alusión (susceptible, sin duda, de afectar a su honor) a la intervención y comportamiento en los sucesos del actor civil, por su condición de sacerdote, no era innecesaria y gratuita en relación con el objeto y la finalidad de la información de que se trata. En suma, tanto por los hechos objeto de la información como por la condición de la persona involucrada en los mismos, resulta innegable la relevancia pública y social de la noticia.

Finalmente, cabe observar también, frente al alegato del actor en el proceso civil y demandado en este proceso constitucional de que la noticia fue pu-

blicada en un tono claramente sarcástico, que el carácter molesto o hiriente de una información no constituye por sí solo un límite al derecho a la información (...).

Fallo:

Otorgar el amparo solicitado por don Juan Luis Cebrián Echarri, doña María José Porteiro García y “Promotora de Informaciones, S.A.”, y, en consecuencia:

1. Reconocer el derecho de los demandantes a la libertad de comunicar información veraz.
2. Anular las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 11 de diciembre de 1989 (recurso de casación núm. 674/88), y, consecuentemente, la de la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid, de 23 de febrero de 1988 (rollo de apelación núm. 63/87), y la del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Madrid, de 9 de diciembre de 1986 (autos núm. 642/86).